

XII. CONCLUSIONES

1. En México, las candidaturas independientes o ciudadanas no están reguladas en la legislación secundaria porque no existe base constitucional para ello, a lo que se agrega que el proceso electoral se sustenta en principios aplicables a la contienda entre partidos políticos, tales como la regulación del financiamiento y el acceso a medios de comunicación.
2. La facultad exclusiva otorgada a los partidos políticos para registrar candidatos a cargos de elección popular, establecida en el artículo 218, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no transgrede el derecho a ser votado, ya que éste debe ser interpretado sistemática y armónicamente con otros valores establecidos en la Constitución Federal como el sistema de partidos políticos y los principios de la función estatal electoral.
3. La regulación de las coaliciones partidarias establecida en el artículo 95, párrafos 9 y 10, del Código Federal de Institu-

ciones y Procedimientos Electorales no transgrede el principio de certeza establecido en el artículo 41 constitucional, ya que permite al elector identificar de entre los partidos coaligados la opción política de su preferencia y, en consecuencia, marcar en la boleta el emblema del partido de su preferencia; con ello se transparenta la fuerza electoral de cada uno de los partidos coaligados como se expresó en las urnas.

4. La regulación de las coaliciones partidarias establecida en el artículo 95, párrafos 9 y 10, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no transgrede la libertad de asociación en materia política, ya que, si bien ésta constituye un derecho público fundamental indispensable en todo régimen democrático, no es absoluto o ilimitado, de ahí que los partidos políticos puedan realizar coaliciones, frentes y fusiones, en los términos, condiciones y modalidades que establezca el legislador ordinario.

5. El artículo 96, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece el mecanismo de transferencia de un determinado porcentaje de votos provoca que la voluntad expresa de un elector que ejerce su derecho fundamental a votar, establecido en el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, manifestada a través del voto en favor de un determinado partido político coaligado, se vea alterada, menoscabada o manipulada, toda vez que su voto puede transferirse a otro partido político de la coalición, por tanto, transgrede el derecho a votar y los principios de certeza y objetividad consagrados en el artículo 41 de la Constitución Federal.

6. El artículo 22, párrafo 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al establecer que en los requi-

sitos de elegibilidad que regulen los estatutos de los partidos políticos sólo se podrán establecer exigencias de edad, nacionalidad, residencia, capacidad civil y sentencia ejecutoriada en materia penal, restringe la facultad que los partidos políticos tienen en el ámbito de su vida interna para establecer otros requisitos, siempre y cuando sean razonables y no vulneren el contenido esencial del derecho a ser votado y otros derechos fundamentales.

7. El sistema para el financiamiento público de los partidos políticos establecido en el artículo 78, párrafo 1, inciso c), fracción I, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es constitucional, ya que reitera lo dispuesto en el artículo 41, base II, inciso c), de la Constitución Federal.

8. El legislador ordinario tiene libertad para establecer los requisitos para la creación de los partidos políticos, siempre que no contravengan los principios fundamentales establecidos en la Constitución Federal.

9. La Ley para la Reforma del Estado no resulta aplicable al procedimiento legislativo establecido en los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10. El artículo 49, párrafo 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que regula la contratación de propaganda en radio y televisión en materia electoral, al reiterar la prohibición establecida en el artículo 41, base III, apartado A, párrafo tercero, constitucional, no contraviene los derechos de libertad de información y expresión.

11. El criterio para distribuir los tiempos en radio y televisión entre los partidos políticos establecido en el artículo 56, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no contraviene a la Constitución Federal, ya que sólo reitera lo señalado en el numeral 41, base III, apartado A, inciso e), de la propia Carta Magna.

12. El artículo 28, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al establecer la obligación de notificar al Instituto Federal Electoral su interés por constituir un partido político en el mes de enero del año siguiente al de la elección presidencial, no viola la libertad de asociación contenida en el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que sólo regula la forma y términos en que los partidos políticos puedan participar en un proceso electoral determinado, lo cual no implica una prohibición para la constitución de nuevos partidos.

13. El artículo 49, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuanto regula la contratación o adquisición de tiempos en esos medios por los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, no transgrede las libertades de comercio, expresión e imprenta contenidas en los artículos 5o., 6o. y 7o. de la Constitución Federal, ya que la prohibición establecida para los partidos políticos en el párrafo tercero del apartado A de la base III del artículo 41 constitucional incluye a los precandidatos y candidatos, pues éstos no pueden existir sin aquéllos, dada la prohibición legal de candidaturas independientes, ciudadanas o no partidarias. Por tanto, es una restricción establecida directamente en la Carta Magna.